



RESOLUCIÓN No. CSJTOR25-40 05 de febrero de 2025

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA

En ejercicio de las facultades legales conferidas en el numeral 6º del artículo 101 de la ley 270 de 1996, modificado por el Artículo 85 de la Ley 2430 de 2024, y en especial las reglamentarias establecidas en el Acuerdo PSAA- 8716 de 2011 y Circular No. PSAC10-53 de 2010, y según lo aprobado en sesión ordinaria del Consejo Seccional del 05 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO

Que el día 27 de enero de 2025, se recibió por reparto solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa suscrita por la señora GISELA TABARES QUINTERO, asignada a este Despacho bajo el número extensión EXTCSJTOVJ25-38, por medio del cual solicita vigilancia judicial administrativa en contra del Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué.

HECHOS

La solicitante manifiesta una presunta mora judicial en el trámite del proceso de alimentos en favor de su menor hijo, pues aduce que desde noviembre se admitió la demanda y se ordenó el embargo del salario del demandado, pero a la fecha no se han librado los respectivos oficios dirigidos al pagador, dentro del proceso bajo el radicado número 73001311000420240037200.

COMPETENCIA

De conformidad con el Art. 101 numeral 6º de la Ley 270 de 1996 y Art. 1º del Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, modificada por la Ley 2430 de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura es competente para adelantar Vigilancia Judicial Administrativa a funcionarios y empleados de los despachos judiciales en el ámbito de su circunscripción territorial.

PROCEDIMIENTO

Este despacho en su condición de ponente y con fundamento en la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa formulada por la señora GISELA TABARES QUINTERO, y de conformidad con el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, **AVOCÓ** conocimiento de las presentes diligencias y mediante auto CSJTOAVJ25-24 de fecha 29 de enero de 2025, dispuso oficiar al doctor GUSTAVO ANDRES GARZÓN



BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, para que por escrito y dentro del término de tres (3) días diera las explicaciones del caso.

En virtud de los artículos segundo y quinto del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, se aplicó el procedimiento descrito para el trámite de la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa, librándose para el efecto el oficio No. CSJTOOP25-284 del 29 de enero de 2025, requiriéndose al doctor GUSTAVO ANDRES GARZÓN BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, para que por escrito diera las explicaciones del caso con relación a los hechos y afirmaciones contenidas en el escrito allegado por la quejosa, y los motivos por los cuales se presenta la deficiencia enunciada y si tiene justificación, advirtiéndosele que contaba para el efecto con un término improrrogable de tres (3) días para remitir la información solicitada, subsanando o normalizando la situación de deficiencia, dentro del término concedido si fuere el caso.

Mediante Oficio No. 0172 de fecha 31 de enero de 2025, el doctor GUSTAVO ANDRES GARZÓN BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, dio contestación al oficio enviado por esta corporación, y con fundamento en los señalamientos puestos de presente dio las siguientes:

EXPLICACIONES

El funcionario judicial requerido informa, que el 05 de septiembre de 2024 mediante acta de reparto llegó demanda de alimentos instaurada por GISELA TABARES QUINTERO contra RANDI ARTURO MERCADO JIMÉNEZ, la cual fue inadmitida mediante providencia del 10 de septiembre de 2024, debido a que no cumplía con los requisitos formales para la presentación de la misma como lo son, no acredita haber remitido demanda y anexos como lo que exige la Ley 2213 de 2022 y no se encuentra representada por apoderado.

Asimismo, señalo que el 12 de septiembre de 2024, la demandante procedió a subsanar la demanda dentro de la cual solicito amparo de pobreza, razón por la cual el despacho en aras de garantizar el derecho de representación procedió a conceder el amparo de pobreza oficiando a la defensora de familia adscrita al Juzgado para que fuera quien representara los derechos del NNA I.G.M.T.

Del mismo modo, indico que la Defensora de familia adscrita al Juzgado la Dra. Yamile Millán, emitió contestación informando que aceptaba representar los derechos del NNA I.G.M.T., sin embargo, en el año 2024 en noviembre / diciembre, el ICBF presentó cambios de personal incluyendo a la defensora de familia adscrita al despacho, la cual actualmente es la doctora Yennifer Ruiz.

Igualmente el funcionario menciona que el despacho mediante providencia del 02 de diciembre de 2024, procedió a oficiar a la Dra. Yennifer Ruiz, para que se hiciera parte del proceso y así garantizar los derechos al NNA.



Finalmente, refirió que mediante providencia del 30 de enero de 2025, procedió a admitir la demanda de alimentos decretando medida provisional de alimentos en favor del NNA I.G.M.T.

APERTURA DEL TRÁMITE DE LA VIGILANCIA

De conformidad con las explicaciones dadas por el funcionario judicial requerido y por no encontrar mérito para dar apertura a la presente Vigilancia Judicial Administrativa, se entrará a resolver de plano la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa formulada por la señora GISELA TABARES QUINTERO.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Con fundamento en los hechos expuestos en el oficio de solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa, y, de conformidad con las explicaciones dadas por el doctor GUSTAVO ANDRES GARZÓN BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, entrar a decidir si existe o no mérito para ejercer el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa, para lo cual deberá establecer si el funcionario judicial requerido titular del Despacho donde cursa el proceso objeto del presente tramite, incurrió o no en actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia.

Que, con el fin de absolver el anterior interrogante, el Consejo Seccional considera pertinente estudiar (i) Marco Jurídico de la Vigilancia Judicial Administrativa. (ii) Análisis del Caso Concreto.

MARCO JURÍDICO DE LA VIGILANCIA JUDICIAL

La Vigilancia Judicial Administrativa fue establecida por la Ley 270 de 1996 y reglamentada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, normas éstas que la definen como una herramienta que sirve para verificar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, como también para procurar el normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados de los Despachos Judiciales.

Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Circular PSAC10- 53 del 10 de Diciembre de 2010, hace algunas precisiones sobre el alcance del mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa, y señala que el mismo apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejos Seccionales - antes salas administrativas, indicar o sugerir el sentido de las decisiones, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la ley, y en fin nada que restrinja su independencia en el ejercicio de la función judicial.



“En el ejercicio de esta atribución deberá adelantarse con especial respeto a la denominada independencia interna del poder judicial.....”

Que una vez estudiados los anteriores postulados y de acuerdo con la competencia atribuida al Consejo Seccional de la Judicatura en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996, es claro señalar que el **ámbito y alcance** de la Vigilancia Judicial Administrativa apunta a que se adelante control y seguimiento al cabal cumplimiento de los términos procesales.

DECISIÓN

Del trámite de las presentes diligencias se tiene, que en el Despacho vigilado cursó el proceso de Alimentos, promovido por GISELA TABARES QUINTERO contra RANDI ARTURO MERCADO JIMÉNEZ, en representación de su menor hijo I.G.M.T, bajo el radicado número No. 73001311000420240037200.

De los hechos narrados en el oficio de solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa, se evidencia, que la inconformidad radica en una presunta mora judicial en el trámite del proceso de alimentos en favor de su menor hijo, pues aduce que desde noviembre se admitió la demanda y se ordenó el embargo del salario del demandado, pero a la fecha no se han librado los respectivos oficios dirigidos al pagador, dentro del proceso bajo el radicado número 73001311000420240037200.

Por su parte, el doctor GUSTAVO ANDRÉS GARZÓN BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, informó: i) que, el 05 de septiembre de 2024 mediante acta de reparto llegó demanda de alimentos instaurada por GISELA TABARES QUINTERO contra RANDI ARTURO MERCADO JIMÉNEZ, la cual fue inadmitida mediante providencia del 10 de septiembre de 2024, en razón a que no cumplía con los requisitos formales para la presentación de la misma como lo son, no acredita haber remitido demanda y anexos como lo exige la Ley 2213 de 2022 y no se encuentra representada por apoderado ii) El 12 de septiembre de 2024 la demandante procedió a subsanar la demanda dentro de la cual solicito amparo de pobreza, razón por la cual el despacho en aras de garantizar el derecho de representación procedió a conceder el amparo de pobreza oficiando a la defensora de familia adscrita al Juzgado para que fuera quien representara los derechos del NNA I.G.M.T. iii) La Defensora de familia adscrita al Juzgado la Dra. Yamile Millán, emitió contestación informando que aceptaba representar los derechos del NNA I.G.M.T., sin embargo, en el año 2024 en noviembre / diciembre, el ICBF presentó cambios de personal incluyendo a la defensora de familia adscrita al despacho, la cual actualmente es la doctora Yennifer Ruiz iv) Mediante providencia del 02 de diciembre de 2024, procedió a oficiar a la Dra. Yennifer Ruiz, para que se hiciera parte del proceso y así garantizar los derechos al NNA v) Mediante providencia del 30 de enero de 2025 procedió a admitir la demanda de alimentos decretando medida provisional de alimentos en favor del NNA I.G.M.T.

En este orden de ideas y del trámite de las presentes diligencias se advierte, que según lo informado por el funcionario judicial requerido y una vez revisado el informe resumen de la actuación procesal, se evidencia que por parte del despacho vigilado se han adelantado las actuaciones pertinentes en el marco de su competencia. Además, se advierte que el último



auto librado data del 30 de enero de 2025, donde resolvió admitir la demanda y ordenó imprimirle el trámite indicado en el artículo 391 del Código General del proceso, demás normas concordantes y pertinentes, asimismo notificar al Procurador de Familia y el contenido del auto al demandando y córrasele traslado de la demanda junto con sus anexos por el término de 10 días para que conteste, medidas cautelares, entre otras disposiciones.

Por otra parte, y bajo el principio de autonomía e independencia judicial, el funcionario judicial requerido, ha proferido las decisiones que en derecho corresponde en el marco del procedimiento establecido y las normas aplicables al trámite de los procesos de alimentos.

Así las cosas, el Consejo Seccional de la Judicatura, considera que el objeto y razón de ser del mecanismo de la vigilancia judicial, es el fenómeno de la mora judicial o dilaciones injustificadas, fenómeno que en estricto sentido se echa de menos en estas diligencias, contrario sensu se advierte una debida diligencia por parte del funcionario judicial requerido al momento de adelantar los trámites correspondientes y surtir las actuaciones pertinentes, aunado al tiempo de la vacancia judicial que inició el 19 de diciembre de 2024.

Por lo anterior, se solicita a la señora GISELA TABARES QUINTERO, en calidad de parte interesada y en su condición de usuario de la administración de justicia, que utilice los medios de comunicación que se tienen dispuestos en la Rama Judicial para brindar información a los usuarios de los diferentes procesos judiciales que cursan en los despachos judiciales y si a través de éstos no recibe respuesta acuda personalmente al juzgado para que sea atendida de manera presencial como es debido.

Por lo anterior, esta judicatura encuentra la concurrencia de la carencia actual del objeto por hecho superado, esto en razón a que el operador judicial informó que resolvió la solicitud echada de menos por la quejosa, aportando el auto que data 30 de enero de 2025, donde se admitió la demanda de alimentos, entre otras disposiciones, que se hace mención en las explicaciones, cesando de esta manera las circunstancias generadoras del presente trámite, como se evidencia en el siguiente vínculo:

[10AutoAdmiteFijaciónAlimentos.pdf](#)

Finalmente, se pone en conocimiento a la quejosa, que el Consejo Seccional carece de competencia para pronunciarse respecto a las decisiones judiciales dictadas al interior del proceso, esto en razón a que sus decisiones se encuentran amparadas por el principio de autonomía e independencia Judicial consagrado en el artículo 228 y 230 de la Constitución Política, pues esta vía no tiene la virtud de fungir como instancia adicional a la que puedan acudir los usuarios de la administración de la justicia, en razón a que para ello se han establecido diferentes medios de defensa ante la correspondiente jurisdicción, como son los respectivos recursos de ley o ante otras instancias judiciales, como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, bajo el entendido que la vigilancia judicial administrativa se encuentra instituida solo para aquellos casos en donde se observe mora judicial injustificada, situación que no se observa en estricto sentido en la presente actuación que nos ocupa.

Por lo tanto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, da por recibidas las explicaciones dadas por el funcionario vinculado, y con fundamento en estas, procederá a



no aplicar el mecanismo de Vigilancia Judicial, y una vez en firme la decisión, al archivo de las presentes diligencias.

Por último, se debe advertir a la solicitante, que la Vigilancia Judicial Administrativa es una acción eminentemente administrativa que **no otorga competencia jurisdiccional al Consejo Seccional**, es decir, la misma comprende únicamente el de ejercer control y hacer seguimiento a los términos procesales, **más no el de modificar decisiones judiciales ni impartir órdenes a los servidores judiciales. En ningún momento abarca el de revisar el contenido de las decisiones Judiciales o controvertir las mismas y mucho menos para refutar las interpretaciones que de la ley hace el Juez en el momento de Administrar Justicia, pues de ser así, esto equivaldría a constituirse en una instancia más, que desnaturalizaría de plano la estructura de la función Jurisdiccional**, la que se funda en el respeto por la autonomía e independencia judicial, por ende la de sus órganos y servidores que ejercen la sagrada misión de administrar justicia. (Art. 230. de la C.P, y 5º de la Ley 270 de 1996).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. - ABSTENERSE por el momento de aplicar el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa al doctor GUSTAVO ANDRES GARZÓN BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. - ENTERAR del contenido de la presente Resolución a la señora GISELA TABARES QUINTERO, en calidad de peticionaria y **NOTIFICAR** al doctor GUSTAVO ANDRES GARZÓN BAHAMON, Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, en calidad de funcionario judicial requerido. Para tal efecto líbrense las comunicaciones del caso.

ARTÍCULO 3º. - SOLICITAR a la señora GISELA TABARES QUINTERO, en calidad de parte interesada y en su condición de usuario de la administración de justicia, que utilice los medios de comunicación que se tienen dispuestos en la Rama Judicial para brindar información a los usuarios de los diferentes procesos judiciales que cursan en los despachos judiciales y si a través de éstos no recibe respuesta acuda personalmente al juzgado para que sea atendida de manera presencial como es debido.

ARTÍCULO 4º. - ORDENAR el archivo de las presentes diligencias, una vez en firme la presente decisión.

ARTICULO 5º. - Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, a la luz de la Ley 270 de 1996 y del Artículo Octavo del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por ser este trámite de única instancia, el cual deberá interponerse ante este Consejo en la



diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a esta, y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 74 y 76 del C.P.A.C.A.

Dada en Ibagué, a los Cinco (05) días del mes de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ
Consejera

ASDG/klrc

RAFAEL DE JESUS VARGAS TRUJILLO
Consejero